

COMUNICADO DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES (UPF)

Contra el abandono institucional, la deshumanización de las personas migrantes y la estigmatización de la vulnerabilidad.

La Unión Progresista de Fiscales desea manifestar públicamente su profunda preocupación ante la escalada de discursos y actuaciones políticas que, bajo la apariencia de orden, seguridad o legalidad, fomentan la deshumanización de personas migrantes en situación de extrema vulnerabilidad y trasladan al espacio público una lógica de confrontación incompatible con un Estado social y democrático de Derecho.

Los acontecimientos recientes en Badalona, donde personas migrantes desalojadas de un edificio municipal han quedado sin alternativa habitacional, expuestas al frío y a la estigmatización pública, no pueden analizarse como un episodio aislado. Se trata del resultado directo de un discurso político que normaliza la exclusión, legitima el abandono institucional y presenta a personas vulnerables como un problema del que hay que deshacerse, no como sujetos de derechos.

La UPF quiere ser clara: no estamos ante un debate de seguridad, sino de humanidad y legalidad democrática. No es aceptable que responsables públicos utilicen su posición institucional para alimentar el miedo, señalar colectivos enteros o azuzar el conflicto social, ni mucho menos para incumplir mandatos judiciales que obligan a garantizar la atención social a personas en situación de desamparo.

Este tipo de discursos y prácticas no solo rompen la cohesión social, sino que erosionan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. La dignidad humana —sin distinción de origen, situación administrativa o condición social— no es una concesión política: es un principio constitucional y un mandato jurídico.

En este contexto, la Unión Progresista de Fiscales respalda plenamente la actuación de la Fiscalía de Barcelona, que ha ejercido su función constitucional de defensa de la legalidad, de los derechos fundamentales y del interés social. Las/los fiscales protegeremos siempre a quienes no tienen voz frente al abuso del poder.

Queremos subrayar que defender a las personas migrantes no es ir contra nadie. Es defender la legalidad, la convivencia y los valores que definen una democracia madura. Criminalizar la pobreza, el desarraigo o la exclusión no resuelve ningún problema: los agrava.

Desde la UPF advertimos con preocupación del riesgo de normalizar discursos de deshumanización que, una vez instalados, terminan erosionando los derechos de todos. La historia democrática europea nos ha enseñado, con suficiente claridad, a dónde conducen esos caminos.

Por ello, hacemos un llamamiento a la responsabilidad institucional, al respeto a los Derechos Humanos y a la recuperación de un debate público basado en hechos, derecho y humanidad. La democracia no se defiende excluyendo, se defiende garantizando derechos, incluso —y sobre todo— cuando es incómodo hacerlo.

Bilbao, Olot, Córdoba, Jaén, Granada y Barcelona, a 27 de diciembre de 2025

El Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales